

EL RETRASO DEL GOBIERNO

LA semana laboral y sindical ha concluido con acontecimientos de indudable importancia. Quizá por vez primera en toda la historia de nuestro movimiento obrero dos sectores especialmente sensibles para la vida ciudadana, el transporte por ferrocarril y la prensa de Madrid, han conocido sendas huelgas de considerable repercusión nacional. El llamamiento del Pleno de representantes de Renfe, cuya representatividad era contestada por la UGT, fue secundado masivamente por los 70.000 agentes de la Red en un paro de dos horas, cuyo planeamiento y ejecución ha logrado una precisión matemática y ha merecido el honoroso título de "a nivel europeo" que otorgan algunos pedestres comentaristas cuando los españoles hacemos algo bien. Los ferroviarios y sus dirigentes sindicales han hecho, no cabe duda, una demostración de fuerza y de sensibilidad; de fuerza porque han demostrado un control absoluto de la situación con ese paro de 8 a 10 y nada más, tomando todas las medidas para que no se produjeran accidentes y logrando que ni un solo agente prolongara el paro más allá de esa hora. De sensibilidad, porque el costo para la empresa y la producción nacional ha sido mínimo, prácticamente nulo, y porque para los usuarios —que en diversos sitios aplaudieron a los huelguistas— el trastorno no ha pasado de un mayor retraso del que habitualmente tienen muchos trenes en los días normales. En todo caso la lección queda ahí, pues un Pleno y unos sindicatos que son capaces de parar la Renfe dos horas han demostrado una organización y representatividad digna de tener en cuenta por la dirección de nuestros ferrocarriles y del propio Gobierno. Por algo hace meses un dirigente sindical le dijo a un directivo de Renfe: "De acuerdo con el Pleno de representantes, todo; al margen de él, nada".

La huelga de periódicos ha tenido otras motivaciones y diferente desarrollo, pero no por ello ha dejado de ser, igualmente, un toque de atención serio al Gobierno para que termine, si es que puede, con esta permanente inseguridad que se vive en los periódicos y revistas ante la facilidad con que actúan los dinamiteros de la democracia. Es interesante observar cómo uno de los sectores más decididos a la hora de parar han sido los trabajadores de talleres y no sólo, creemos, porque el asesinado del "Papus" fuera un obrero, sino más bien por la rápida toma de conciencia del personal de máquinas ante los problemas económicos y políticos por los que atravesamos. Es lógico que las empresas o los directores manifiesten su desacuerdo por el día de huelga e incluso que sea discutible que en cada ocasión de éstas haya que dejar al país sin prensa, pero la realidad es que no se toman medidas de ningún tipo para terminar con los llamados "incontrolados" y los argumentos en favor de la presión para que se tomen salen adelante. La postura de los sindicatos, por otra parte, ha sido unánime y no parece sensato ver manojos donde no los hay.

No obstante, lo más inquietante de la situación en estos momentos es la pasividad del Gobierno a la hora de afrontar los problemas reales, el criterio que se sigue manteniendo de que la situación no es tan grave como parece y el relativo desgaste del propio Parlamento ante los ojos de extensos sectores de trabajadores que no acaban de ver que se haga eco de los proble-

mas acuciantes que tiene la población, especialmente asalariada. En la última reunión de los expertos de los sindicatos con el Ministerio de Economía, éste se comprometió a enviar un programa económico de urgencia con el fin de reunirse al final de la semana; ha transcurrido con creces el plazo acordado y los sindicatos están esperando a que el Gobierno diga esta boca es mía. Hay rumores de que está elaborando un plan con el fin de presentarlo a las Cortes en la primera quincena de octubre. No sabemos qué habrá de cierto en ello, pero es urgentísimo que se haga, pues si actualmente las conversaciones sindicatos-Gobierno, sobre la situación económica, están en un punto muerto se debe única y exclusivamente a que la Administración no ha presentado nada concreto sobre lo que discutir, ponerse o no de acuerdo. Es grave que a estas alturas no haya todavía un plan económico preciso, cuantificado, que se pueda negociar con todas las fuerzas políticas y sociales y ante el que todos sepan a qué atenerse. Un conocido comentarista señalaba hace unos días que había llegado el momento de que los sindicatos y el Gobierno se encerraran en una habitación y no salieran de ella hasta no llegar a un acuerdo; el problema es que no se sabe sobre qué hay que llegar a acuerdos, pues hasta ahora el Gobierno únicamente ha planteado que hay que reducir los salarios, y para ese viaje, en opinión de los sindicalistas, no se necesitan alforjas. Un exponente reciente de la dificultad del diálogo es la subida del salario mínimo interprofesional decretada en el último Consejo de Ministros. Al final la cifra ha quedado en 500 pesetas diarias, es decir, un aumento del 13,63 por 100 con respecto al anterior de 440 pesetas. Eso significa más o menos el aumento del coste de la vida en los seis primeros meses del año. Se supone que, por ejemplo para el ministro de Comercio, según su exposición ante las cámaras de televisión, ello no significa una congelación de salarios, sino una moderación en el crecimiento de las rentas salariales. ¿Qué se entiende entonces por "congelación"? Para los sindicatos, cuando los salarios no suben más que el aumento de los precios la capacidad adquisitiva se queda, si las matemáticas no fallan, más o menos igual, y eso es lo que se llama "congelación", pues en el caso de que los salarios se queden por debajo ya no es "congelación", sino pura y simplemente "reducción", que es cosa bien distinta. Digamos, por lo tanto, que a los aproximadamente seiscientos mil trabajadores que viven con el salario mínimo les han congelado, de momento, sus emolumentos.

Pero no sólo va atrasado el Gobierno en plantear las posibles soluciones económicas. Hace dos semanas hubo otro encuentro en el Ministerio del Trabajo entre los sindicatos y el Gobierno para tratar del "paquete sindical". Allí se quedó que en el plazo de cuatro o cinco días el Ministerio enviaría a las centrales el borrador de Decreto que regularía las elecciones sindicales y la acción sindical en las empresas. Según nuestras noticias, los sindicatos todavía están esperando dicho borrador; es posible que se conozca en el transcurso de esta semana, pero el retraso es evidente. Nada se sabe tampoco de qué va a pasar con la amnistía laboral ni con el patrimonio sindical, aparte, claro está, de que la CEOE se opone a la primera, arguyendo incluso que sería

un atentado a los valores de nuestra civilización, y el Gobierno se está quedando con el segundo sin consultar a nadie. Se habla de que en las Cortes, como derivación del "caso Blanco", el Gobierno se ha comprometido a entrar de lleno en la amnistía política, pero nada se dice de la laboral. Los trabajadores no comprenderían este olvido en un momento en que es necesario liquidar todas las secuelas de la represión anterior. ¿Acaso el Gobierno o algunos parlamentarios no comprenden que para un asalariado es tan grave el haber sido despedido por motivos sindicales o políticos como el proceso o incluso la prisión, sobre todo cuando ambas van parejas?

La situación, por lo dicho, es delicada en el mundo laboral y no ayuda el repetir que no es para tanto. Parece como si se estuviera esperando a la situación límite, a que el enfermo ya no tenga remedio, acaso olvidando que así como a las personas cuando se están muriendo se le aplican los santos óleos, con las naciones no sucede lo mismo; éstas no se mueren, sino que suele aparecer un cirujano o un salvador de hierro o de plomo o de ambas cosas, y lo que muere es la libertad tan duramente conquistada. En las esferas oficiales y no oficiales se oye comentar: "No llegamos a diciembre", "Tenemos para seis meses", como si se tratara de una tienda de ultramarinos. El hecho es que mucha gente empieza a no saber qué está pasando, porque el Gobierno, en vez de hablar de minicrisis, relevos, etcétera, no plantea de una vez un plan económico y político mínimamente coherente sobre el que se pueda discutir y negociar en las Cortes y fuera de las Cortes; porque los partidos políticos no hacen otro tanto, para que la gente sepa qué es lo que plantea cada uno, en qué están de acuerdo y en qué no. Hacen falta alternativas concretas y precisas para el corto y el medio plazo y concertarse para que la resultante pueda aplicarse bajo un control mancomunado. Si se trata de hacer sacrificios colectivos que se diga de una vez cuáles son, cómo se van a repartir en el tiempo y el espacio y quién los va a controlar. Pero lo que no tiene vuelta de hoja es que cuando se planea una operación de este tipo, el contenido, la ejecución y el control debe de ser pactado entre todos. ■

